**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D. C., seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Referencia 11001 40 03 057 2021 00386 00 Acción de Tutela

Cumplido el trámite de rigor procede el Despacho a proferir el fallo que corresponda dentro de la acción constitucional propuesta por el señor CARLOS ALBERTO PEÑARANDA CASTRO contra CONSORCIO EXPRESS SAS manifestando vulneración de los derechos fundamentales de petición, libertad de expresión, información, y orden social justo.

ANTECEDENTE

1. El señor Carlos Alberto Peñaranda Castro señaló que su padre Humberto Peñaranda Lache, falleció 20 de enero de 2021, quien tenía relaciones comerciales con el accionado Consorcio Express SAS.

Los días 18 de febrero y 14 de abril de 2021 radicó derechos de petición ante la entidad encartada solicitando: (i) se relacione por número de placa, tipo de vehículo, marca, y capacidad de pasajeros, todos los automotores que fueron entregados por el señor Peñaranda Lache (q.e.p.d); (ii) copia de los contratos y demás documentos, donde se especifique las condiciones de tiempo, modo y lugar de entrega de los vehículos, y (iii) certifique los pagos mensuales que se hacían a favor del causante, discriminado la entidad bancaria, número de cuenta y en valor consignado. A la fecha en la que se presentó la queja constitucional, no han dado respuesta a los pedimientos, entorpeciendo la sucesión que debe adelantarse.

2. Pretende a través de esta queja el amparo de las prerrogativas invocadas, y se ordene al Consorcio Express SAS que dé respuesta efectiva a los derechos de petición de fechas 18 de febrero, y 14 de abril de 2021.

3. Revisado el escrito de tutela, el Despacho admitió la causa el 6 de abril hogaño ordenándose la notificación a la accionada para que ejerciera su derecho de defensa.

4. El Consorcio Express SAS, manifestó que el señor Humberto Peñaranda Lache, suscribió contratos de vinculación y control total de flota en ocasión de la licitación pública TMSA-LP-004-2009, por los vehículos de placas VDF048, VDM963, y VEV231. El derecho de petición de fecha 18 de febrero de 2021 no fue resultado debido a un error logístico, no obstante, se procedió a contestar la petición elevada por el quejoso, razón por la cual solicito que sean negadas las preatenciones incoadas en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela consagrada en la Constitución Política de 1991, se creó como una vía sumaria, preferente, y perentoria para proteger los derechos fundamentales, que hayan sido amenazados o violentados por las autoridades públicas o los particulares. En dicho evento, cualquier sujeto que se encuentre en estado de indefensión y al que se pueda causar un perjuicio irremediable, podrá acudir al juez constitucional en defensa de las prerrogativas conculcadas como mecanismo transitorio, siempre y cuando no disponga de otro medio de defensa judicial. La vía constitucional no sustituye los mecanismos ordinarios principales, ni modifica las reglas de la competencia de los jueces, ni crea instancias adicionales a las existentes.

Igualmente, la jurisprudencia constitucional en sentencia T-470 de 2019, señaló:

“...El derecho fundamental de petición supone la prerrogativa a obtener una resolución pronta, completa y de fondo. La resolución de fondo supone una resolución suficiente, efectiva y congruente con lo pedido. La Corte Constitucional ha explicado que:

i) una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; (ii) es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y (iii) es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.

De ahí que esa garantía imponga a las autoridades la obligación de adelantar un proceso analítico, dentro del cual: i) se identifique la solicitud, ii) se verifiquen los hechos, iii) se exponga el marco jurídico que regula el tema, iv) se usen los medios al alcance que sean necesarios para resolver de fondo, iv) se pronuncie sobre cada uno de los aspectos pedido y vi) se exponga una argumentación con la que el peticionario pueda comprender completamente el sentido de la respuesta emitida. Así, no basta un pronunciamiento sobre el objeto de la petición cuando en él “no se decide directamente sobre el tema objeto de su inquietud, sea en interés público o privado, dejando [a la persona] en el mismo estado de desorientación inicial...”

4. En el caso concreto, el accionante Carlos Alberto Peñaranda Castro presentó dos derechos de petición ante el Consorcio Express SAS; el primero de ellos se radicó el 18 de febrero de 2021 solicitando *“...especificar tiempo de contrato, pago mensual, número de cuenta, y banco donde Consorcio Express; así mismo especificar tiempo de contrato, pago mensual, número de cuenta y banco donde Consorcio Express depositaba los respectivos pagos. Estos datos se necesitan para poder legalizar el juicio de sucesión por parte de los abogados...”* y el elevado el 14 de abril de 2021, se concretó en: *“...1. cuantos vehículos, le recogió el Consorcio Express SAS a mi padre Humberto Peñaranda Lache (q.e.p.d.) quien en vida estaba identificado con la CC (...) 2. identificación del número de placas de los mencionados vehículos (...) 3. copia del contrato o documento legal donde se especifica las condiciones de tiempo, modo y lugar de entrega de o los vehículos por mi padre al Consorcio Express SAS (...) 4. certificación del pago mensual que se viene realizando a mi padre especificando número de cuenta ya sea de ahorro corriente entidad bancaria donde se consigna y el valor del monto mensual...”*

A su turno, Consorcio Express SAS, en virtud de la queja constitucional incoada en su contra, procedió a responder los derechos de petición referidos en líneas precedentes, señalando que: *“...Consorcio Express S.A.S. realiza el pago de la renta mensual de los vehículos de placa VDC048 y VEV231 con ocasión de los contratos de compraventa suscritos con el señor HUMBERTO PEÑARANDA LACHE (QEPD) identificado con cedula de ciudadanía No 5.560.518, el 13 de agosto de 2014 y 30 de agosto de 2013, respectivamente. (...) Es preciso aclarar que el vehículo de placa VDM963, no fue entregado para chatarrización en las condiciones establecidas en el contrato, por lo que se deben acordar las condiciones de entrega nuevamente. En ese orden de ideas, no se puede adjuntar certificación del mismo (...) Se adjuntan con la presente respuesta los contratos de compraventa de los vehículos de placa VDC048 y VEV231 y el contrato de vinculación y entrega total de la flota del vehículo de placa DM963. Asimismo, se adjunta certificación en la que se*

especifica el valor mensual de la renta...”, adjuntándose los mismos al escrito de contestación.

Respuesta que fue remitida el 23 de abril de 2021 al correo electrónico señalado en el libelo (calpeca36@hotmail.com). Dicha contestación se surtió con posterioridad al lapso de tiempo que tiene la encartada para dar contestación al petitorio radicado el 18 de febrero de 2021, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1755 de 2015,⁴ y en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 dictado por el Gobierno Nacional dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica,⁵ aunado a la naturaleza el requerimiento, corresponde a los treinta (30) días siguientes a la recepción del competente, es decir, que al momento de la interposición de esta tutela, que fue el día 26 de marzo de 2021, y (ver Acta Individual de Reparto), ya se había vencido el lapso para dar respuesta, el cual acaeció el 6 de abril de 2021. Lo que no ocurre con la radicada el 14 de abril de 2021, pues dicho término se vencería el 27 de mayo hogaño.

Con independencia a lo anterior, lo cierto es que aquella se brindó y fue comunicado al actor, quien confirmó su recibido mediante una conversación telefónica sostenida con uno de los empleados del Juzgado, donde se indicó que la documental peticionada fue entregada de forma incompleta pues faltó relacionar la fecha, y valores que se habían pagado al causante con sus respectivos soportes.

En torno a lo anterior, y atendiendo la jurisprudencia en cita, es menester iterar que la respuesta a un derecho de petición se estima efectiva y suficiente cuando aquella soluciona de forma material el caso que se plantea, con independencia a que sea negativa o positivamente, y congruente cuando exista coherencia entre lo peticionado y lo resuelto. De tal manera que la solución a lo requerido debe versar sobre la pregunta en concreto y no sobre otro tema. El pronunciamiento del receptor debe ser claro y preciso, donde se destaque los aciertos o desaciertos de lo peticionado.

Por lo tanto, se evidencia que en efecto se absolvió todos los puntos peticionados por el actor, puesto que: (i) se presentó memorial donde se señaló que los automotores de placas VDC048 y VEV231 fueron entregados con ocasión a los contratos de compraventa suscritos por el causante. Puntualizando, que el vehículo de placa VDM963, no fue entregado para chatarrización en las condiciones establecidas en el contrato, por lo que se deben acordar nuevas condiciones de entrega; (ii) se emitió un certificado donde se consignó que el contrato de renta fija mensual tiene un término máximo de duración de 24 años que finalizara en el mes de noviembre de 2036, cuyo pago mensual es de \$1.554.739,00 para el vehículo de placa VDF048 realizado desde el mes de agosto de 2014, y por la suma de \$2.159.173,00 para el vehículo de placa VEV231 desde el mes de septiembre de 2013, pagaderos en la cuenta corriente No. 21000032028 del Banco Caja Social, y (iii) se adjuntó dos contratos de compraventa de los vehículos de placas VEV231 y VDF048 con modalidad de pago de renta fija mensual, y un contrato de vinculación del vehículo de placa VDM963. Luego se itera que la respuesta solo debe comprender lo solicitado, y en el presente caso no se evidenció que el quejoso haya solicitado una relación de los periodos en que se han efectuados cada uno de los pagos, desde que se suscribió los contratos a la fecha en que falleció el causante, junto con las respectivas probanzas que soporte sus afirmaciones; por ende, no se puede endilgar a la acusada alguna responsabilidad sobre ello.

4 “...Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente...”.

5 Estado de Emergencia prorrogado hasta el día 31 de mayo de 2021, de acuerdo a la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=159366>

En ese orden de ideas, si hubo vulneración o amenaza al derecho incoado, este cesó al momento de contestarse el requerimiento presentado por el actor, en consecuencia, no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inocua. De esta manera, se configura el hecho superado, pues la aludida pretensión se encuentra satisfecha y los derechos a salvo.⁶

5. Finalmente cabe precisar, que el Despacho no evidencia quebrantamiento alguno por parte de la encartada frente a las prerrogativas atinentes a la libertad de expresión, información, petición, y orden social justo, deprecadas por el actor, puesto que en los hechos del escrito de tutela no se advirtió circunstancias concretas que permitan enviciar su transgresión.

En ese orden de ideas se dispensará la protección invocada, sin entrar en mayores consideraciones.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por el señor CARLOS ALBERTO PEÑARANDA CASTRO por las consideraciones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: COMUNICAR a las partes la presente decisión por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

**MARLENE ARANDA CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**bf48d84e79f2767a5061a4d0a0ac98284b9ef99ca09fda359d41802e4a7dc5
d1**

Documento generado en 06/05/2021 06:40:33 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

⁶ Sentencia T-041 de 2016